

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
PALMIRA – VALLE

SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA No 040.–
Nueve (09) de junio de dos mil veintidós (2022)

1. MOTIVO DE LA DECISIÓN

Proferir sentencia de primera instancia en este trámite de tutela iniciado por el señor **WILLY JHONATHAN RODRÍGUEZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14702121, contra la **FISCALÍA LOCAL 63**, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.

2. ANTECEDENTES

Sostiene el accionante que, a raíz de un accidente de tránsito que aconteció el 16 de abril del 2019, donde estuvieron involucrados él y el señor Steven Fernández Burdugo, éste último como presunto infractor, la Fiscalía 63 local de Palmira citó a su apoderada, la abogada del implicado y la representante de la compañía aseguradora SBS Seguros, al Despacho, sin embargo, su abogada solicitó aplazamiento de la diligencia, por cuanto pretendía realizar reclamación formal ante la aseguradora. Agrega que su mandataria presentó la debida petición ante la Compañía de Seguros con el fin de obtener reconocimiento e indemnización afectación a póliza de responsabilidad civil extracontractual, por las lesiones que sufrió en dicho accidente de tránsito por parte del conductor de la buseta, misma que fue remitida por correo certificado el 31 de mayo del 2019.

El 20 de septiembre de 2021 se realizó conciliación masiva en las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali seccional palmira y la Fiscalía convocó a las partes, asistiendo la representante de la compañía aseguradora y su abogada; conciliación que fracasó atendiendo lo manifestado por la abogada de la aseguradora, quién afirma no poder realizar ningún ofrecimiento económico a la presunta víctima hasta tanto la Fiscalía no corra el traslado del escrito de acusación.

Así las cosas, el 5 de mayo hogaño, por medio de un derecho de petición, solicitó a la Fiscalía 63 local información sobre el avance de su proceso penal radicado 765206000180201900863, requiriendo se realizará la entrega del escrito acusación a las partes, en aras de culminar alguna conciliación con la compañía



aseguradora, no obstante, a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte del despacho fiscal.

Así las cosas, solicita de tutele su derecho fundamental de petición y se ordene a la Fiscalía 63 local de este municipio dar respuesta oportuna sobre el avance del caso penal, así como disponer la entrega del escrito acusación a las partes. Para sustentar lo expuesto allega copia de informe policial de accidentes de tránsito, solicitud de entrega de vídeos, constancia Fiscalía de fecha 27 de mayo del 2019, guía correos certificado, formato constancia de no acuerdo conciliatorio y derecho de petición fechado 5 de mayo del 2022 suscrito por el accionante.

3. DEL TRÁMITE

Mediante Auto Interlocutorio N° 073 del 27 de mayo de 2022, este Despacho asumió el conocimiento de la presente acción de tutela, ordenándose la notificación del ente accionado –FISCALÍA 63 LOCAL PALMIRA, VALLE–.

3.1. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El FISCAL 63 LOCAL DE PALMIRA se informa que, a través de correo adiado 27 de mayo del 2022 remitido a sebastian.unad1573@gmail.com, se procedió a informar al señor Willy Jhonathan Rodríguez Gómez fecha y hora para llevar a cabo diligencia de traslado de escrito de acusación, dentro del radicado 765206000180201900863, donde figura como víctima, por el delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1 Problema Jurídico:

De acuerdo a la situación fáctica, normativa y probatoria que sustenta la acción de tutela que se decide, corresponde a este Despacho determinar su procedencia frente al caso particular y la presunta vulneración de los derechos incoados por la accionante, teniendo en cuenta que durante el trámite, según lo informado por el FISCAL 63 LOCAL DE PALMIRA, VALLE, se procedió a dar respuesta de fondo, congruente y definitiva a la petición fechada 05 de mayo de 2022, con la que buscaba se procediera a agotar diligencia de traslado de escrito de acusación dentro del radicado 76520600018020190863, por la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito, determinación que fue puesta en conocimiento al actor a través de su correo electrónico, tal y como consta en los documentos allegados, que reposa en el expediente digital.

4.2. PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.



4.2.1. De los derechos presuntamente vulnerados.

4.2.1.1 Derecho de petición: Reiteradamente nuestra máxima Corporación de Justicia, en su incesante tarea de desarrollar la norma de normas, ha señalado que el derecho de petición, consagrado en la Carta Política, tiene como elementos esenciales el que las respuestas dadas a los peticionarios sean oportunas y que resuelvan de fondo, de manera clara y precisa a las pretensiones por ellos presentadas, sin que ello implique una decisión favorable a sus intereses. La razón de ser de que las respuestas de dichas peticiones sean comunicadas al peticionario en los términos ya indicados, no es sólo la de conocer el contenido mismo de la comunicación, sino también, con el fin de poder interponer los recursos y acciones del caso. El juez de tutela tiene la obligación de indagar cuál o cuáles son los derechos fundamentales que van a ser protegidos con su decisión, pues la idea del constituyente al crear este mecanismo de defensa judicial, preferente y sumario fue precisamente la protección de los derechos fundamentales y no la creación de un procedimiento paralelo o complementario a los ya existentes en el ordenamiento.

La Corte constitucional al revisar un caso que planteaba una situación similar a la que hoy se decide por esta instancia, en sentencia T- 562 del 27 de julio de 2007. M. P. Dra. Clara Inés Vargas, refiere que el artículo 23 de la Constitución Política, que consagra el derecho fundamental de petición, establece una correlativa obligación por parte de las autoridades de otorgar una respuesta clara, de fondo y oportuna; identificando los componentes elementales del núcleo conceptual de este derecho que protege la Constitución Nacional de 1991, consistentes en “(i) la pronta contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que deberá reunir (ii) los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se entienda que (iii) ha resuelto de fondo y satisfecho la solicitud del petente.” Refiere, además, que la respuesta es suficiente cuando resuelva materialmente la petición y satisface los requerimientos del actor, sin perjuicio de que la respuesta no acoja las pretensiones del peticionario, que es efectiva si la respuesta soluciona el caso puesto en su conocimiento, y es congruente si hay coherencia entre los que se responde y lo pedido, esto es, que la solución a los pedido verse sobre lo preguntado y no sobre tema semejante o relativo al asunto principal de la solicitud, sin que excluya la posibilidad de suministrar información adicional que tenga relación con la petición formulada.

Respecto a la oportunidad en que debe darse la respuesta, o sea el término que tiene la administración para resolver las peticiones que le han formulado, se acude por regla general al artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone 15 días para resolver contados desde su recibo. Norma según la cual, cuando no fuere posible resolver la petición en el plazo mencionado, deberá ponerse en conocimiento este hecho al interesado, expresando los motivos de la demora e indicando a su vez la fecha en que se dará respuesta, la cual debe ser razonable en consideración a la complejidad o dificultad de la solicitud. Igualmente, la Corte ha consolidado la jurisprudencia sobre el derecho de petición en las sentencias T-377 de 2000 y T



-1060 de 2001, identificando los componentes conceptuales básicos del derecho así:

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado” (T – 562 de 2007).

Concluye la Corte, con la afirmación que el derecho de petición es vulnerado cuando la entidad no resuelve de fondo lo pedido, o cuando no profiere una pronta respuesta, de acuerdo con los términos que directamente fije el legislador.

4.2.2 La carencia de objeto en la acción de tutela.

La acción de tutela, de acuerdo con la doctrina constitucional, está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación. Sin embargo, durante el trámite constitucional pueden presentarse circunstancias que permitan inferir que las vulneraciones o las amenazas invocadas cesaron porque: (i) se concretó el daño alegado; (ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado; o (iii) se presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo. Tales circunstancias generan la extinción del objeto jurídico de la acción de tutela, por lo que cualquier orden de protección emitida caería en el “vacío”. Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como “*carencia actual de objeto*”, y se ha clasificado en tres categorías generales: (i) el hecho superado, (ii) el daño consumado y (iii) la pérdida de interés en la pretensión¹.

¹ Sentencia T-703 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.



Con relación al presente caso, el *hecho superado* se configura cuando en el trámite constitucional las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión perseguida a través de la acción de tutela. En estos eventos, la intervención del Juez de tutela carece de sustento y hace improcedente el estudio de fondo. La Corte Constitucional al analizar el tema del hecho superado, en Sentencia T-905 de octubre 24 de 2002, M. P. Dr. Jaime Araujo Rentarúa, dijo:

“Cuando la situación de hecho que dio lugar a la solicitud de amparo constitucional ha desaparecido, la eventual orden de dar, hacer o no hacer que debería impartir el juez, dada la acción u omisión de una autoridad o de un particular en los casos expresamente consagrados en la ley, perdería su razón de ser.

Sobre el tema tratado, en la sentencia T-781/02 dijo esta Corporación:

“la solicitud de protección de amparo constitucional, consagrado en el artículo 86 suprallegal, desarrollado por el decreto 2591 de 1991, consiste en un procedimiento preferente y sumario que pretende la protección cierta, inmediata y eficaz del derecho constitucional fundamental vulnerado o en amenaza de vulneración por parte de la actuación activa o pasiva de una autoridad o de un particular, en los casos estipulados legalmente.

De suerte que la eficacia resultante de la solicitud de amparo constitucional implica que lo ordenado judicialmente sea cumplido de manera inmediata, de tal forma que la autoridad o el particular actúen o cesen en la violación del derecho que fundamentó la tutela, si lo decidido en la sentencia no cumple con su finalidad, la acción de tutela pierde su objetivo y con ello su razón de existencia.

Cuando en el trámite de la solicitud de protección constitucional, el juez compruebe que la situación de hecho que dio lugar a la misma, ya se ha satisfecho, perdería la razón de ser una eventual orden en búsqueda de la defensa del derecho en conflicto, pues es evidente que nos encontraríamos frente a un hecho superado”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción de tutela se consagró como un medio tendiente a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, su prosperidad se concreta en la orden que imparte el juez, a través de la cual se obtiene la protección deprecada, pero si, durante su trámite, como en este caso, desaparece el supuesto de hecho motivo de la petición de protección constitucional, el instrumento de defensa pierde su razón de ser. *“Ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia.”* (Sentencia T-33/94) Sin embargo, el Juez deberá constatar que en efectivamente se haya satisfecho plenamente la pretensión, de lo contrario deberá garantizar la tutela de los derechos deprecados. Una vez verificada la carencia de objeto por hecho superado, el juez podrá abstenerse de impartir orden alguna².

4.3 CASO CONCRETO

² Sentencia T-321 de 2016 y T-439 de 2018.



De cara al problema jurídico planteado, advierte este Despacho que, en efecto, tal y como se deviene de las pruebas obrantes en el expediente, dentro del presente trámite se procedió a resolver de fondo, de manera clara, precisa, congruente y definitiva la petición que elevara el señor Willy J. Rodríguez Gómez, con la que buscaba, entre otras cosas, en lo posible agotar la diligencia de traslado de escrito de acusación dentro del asunto penal radicado 76520600018020190863, por la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito; para lo cual el señor Fiscal 63 Local de esta ciudad, dispuso fijar fecha y hora. Si ello es así, no es dable pregonarse vulneración a derecho fundamental alguno, en cambio sí, una carencia actual de objeto por hecho superado. Tal y como como se mencionó en el precedente jurisprudencial de esta decisión, el hecho superado se configura cuando la amenaza o vulneración del derecho fundamental invocado cesa por la acción u omisión de la autoridad demandada; en el *sub-judice*, la acción de amparo constitucional tenía como fin lograr que se informara sobre el estado actual del aludido proceso penal, donde el accionante figura como presunta víctima, y de ser el caso se agotara la diligencia de traslado del escrito de acusación; actuación que se ejecutó según lo informado por el Despacho Fiscal, quien notificó al petente sobre la fecha y hora asignada para tal diligencia judicial.

En este punto es importante precisar que el otorgar una respuesta eficaz, efectiva, congruente a quien la solicita, no significa que la misma tenga que ser resuelta en determinado sentido, pues lo que se busca es que el solicitante quede satisfecho con la información suministrada y se le informe, si es del caso, las razones que generaron la negativa de lo pedido. Al respecto, el máximo tribunal constitucional ha dicho: *«El derecho de petición no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. La resolución, producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que, si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional»* (Sentencia T-242 de 1993)³. Aunado a lo anterior, huelga aclarar que el trámite en sí del traslado del escrito de acusación es una actuación propia del Ente Acusador, en la que no puede inmiscuirse esta Juez Constitucional, al ser una competencia exclusiva del titular de la acción penal. Por lo que no es dable de esta instancia propender más allá del amparo constitucional al derecho fundamental de petición, mismo que, como se dijo, fue restaurado, atendiendo la respuesta emitida por el accionado.

Colofón de lo expuesto, en las circunstancias descritas, procede la declaratoria de un hecho superado, pues se evidencia la satisfacción integral de los derechos fundamentales de los cuales se adujo una vulneración.

³ También se reitera el tema en las sentencias T-170 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-518 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-396 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-316 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.



4 PARTE RESOLUTIVA:

En virtud de lo expuesto, el **JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PALMIRA, VALLE**, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la *carencia actual de objeto por hecho superado* en la tutela interpuesta por el señor **WILLY JHONATHAN RODRÍGUEZ GÓMEZ** contra la **FISCALÍA 63 LOCAL PALMIRA, VALLE**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito, conforme a lo previsto en el Art. 31 del Decreto 2591 de 1.991.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres días siguientes a su notificación, **REMÍTANSE** estas diligencias oportunamente a la Corte Constitucional para su eventual **REVISIÓN** conforme a lo previsto en el Art. 31 del Decreto 2591 de 1.991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CAROLINA GARCÍA FERNÁNDEZ
Juez

Firmado Por:

Carolina Garcia Fernandez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Penal 004
Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12



Código de verificación: **1ea3aacd424add88cc1b3e2cf2581cff6958dfb909c07ff2bc7f9659ec8aca95**

Documento generado en 09/06/2022 02:26:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>